

Y si los campesinos se extinguen...

(REFLEXIONES SOBRE LA COYUNTURA POLITICA
DE 1976 EN MEXICO)

ROGER BARTRA

La imaginería política de la independencia del Estado y el "misterio" de la sucesión presidencial

Para que un sistema de explotación de la mayoría por la minoría pueda reproducirse se requiere —entre otras cosas— la presencia en la sociedad de ciertos fluidos enigmáticos convocados por el aquelarre burocrático de los políticos dominantes: flujos ideológicos que se cuelan hasta en los más íntimos poros de la vida cotidiana con el fin de transformar, para decirlo como metáfora pitagórica, el misterio del *número* en la realidad del *drama*. En los países que han alcanzado una democracia burguesa moderna las matemáticas electorales y parlamentarias parecen crear la tragedia política. Otros países que, como México, viven fuera del mundo pitagórico de la aritmética política occidental tienen formas diversas y originales de alimentar el misterio sobre el que se levanta el edificio de la política. En México el democrático y griego número de votos, gestador de la vida política, ha sido sustituido por una leyenda de corte más bien medieval: es el *tapado* que como nuevo *golem* espera que se le introduzca en la boca la adecuada combinación cabalística de las letras del nombre de Dios para tomar vida propia e independiente durante seis años exactos; como el *golem* de la vieja tradición judía, el *tapado* mexicano también destruye a su procreador: pero encuentra su fin en las palabras talmúdicas de "no reelección".

Nadie sabe cómo es elegido el presidente en México; todas las especulaciones de politólogos, periodistas, historiadores y aspirantes a políticos llegan a la misma conclusión banal: el presidente que sale nombra a su sucesor impulsado por una mezcla incomprensible y azarosa de presiones, simpatías, traiciones y compadrazgos. Todos suponen que existe un grupo más o menos reducido de políticos selectos, ubicados en la cumbre del aparato, que participa del "secreto" de la sucesión; pero desde hace 30 ó 40 años todos los "iniciados" han guardado silencio sobre los meca-

nismos ocultos y se han llevado celosamente su secreto a la tumba. Cada seis años, no obstante, la "opinión pública" se quiebra la cabeza y es mantenida en ascuas ante el misterio de la sucesión presidencial.

Sin embargo, no cabe ninguna duda de que dentro de algún tiempo, digamos a mediados del siglo XXI, los historiadores dirigirán una desapasionada mirada de tedio a larga sucesión de sucesiones presidenciales que ojalá no caracterice a toda la historia política de los últimos dos tercios del siglo XX. Tendrán la misma sabida actitud del obrero y del campesino de hoy, que no acaba de entender que una aburrida y burocrática selección de candidato pueda convertirse milagrosamente, para la inteligencia burguesa y pequeñoburguesa, en un emocionante misterio político. Por eso, el primer domingo de julio de cada final de sexenio ha sido para muchos mexicanos un día como cualquier otro, en el que las urnas se llenan de votos como de palabras vacías los discursos que los políticos pronuncian los otros días de cada año de cada sexenio. Es cierto que a veces el aburrido ritual se presenta bañado en sangre; pero ello no afecta el ceremonial esencialmente burocrático de las sucesiones presidenciales. A fin de cuentas, la lucha interna por lograr la presidencia de la República no se diferencia por su forma de los oscuros pleitos que se desencadenan entre oficinistas por alcanzar la jefatura de una húmeda y mohosa oficina subalterna de recaudación de impuestos. No deja de ser inquietante que durante decenios se decida de manera tan baja el puesto político más alto de la nación; y sin embargo, no es posible dejar de reconocer que este mecanismo político forma parte de la maquinaria estatal burguesa posiblemente más perfeccionada de América Latina.

Es justamente este carácter tan avanzado y sofisticado del Estado mexicano el que permite explicar cómo la banalidad de la forma de sucesión presidencial se ha convertido en el misterio principal que la ciencia política en México procura inútilmente develar. Sólo un Estado profundamente burgués, en un país donde la clase capitalista moderna ha tomado el poder por la vía revolucionaria, puede lograr imponer, de manera tan radical y duradera, el conjunto de mitos históricos y desviaciones ideológicas que en México justifican y apuntalan la hegemonía burguesa. Al mismo tiempo, el mecanismo despótico y enigmático de elección del presidente se forjó en un país agrario y en consecuencia el campesinado constituyó una pieza fundamental del sistema; es probable, incluso, que sean los campesinos los poseedores de la clave del misterio.

El misterio de la sucesión presidencial se reduce, en realidad, al siguiente planteamiento: en México hay un Estado tan autónomo de las luchas de clases, tan bonapartista, tan excepcional, tan revolucionario, tan nacional, tan por encima de la sociedad y tan arbitral que es capaz de autorreproducirse y autoalimentarse sin necesidad de intervención de las fuerzas sociales. El Estado se supone que es el gestor determinante de la sociedad, es quien da vida a las clases sociales y quien ordena y decide la forma del desarrollo económico. ¿A quién —bajo estas condiciones—

puede ocurrírsele que el Estado no es más que una superestructura cuyas características dependen finalmente de las condiciones económicas en que vive la sociedad? Esta idea, aunada a una praxis correspondiente, sólo puede ser una tesis proletaria que recoja la tradición marxista de pensamiento. Vale la pena reproducir una frase escrita por Marx muy pocos años antes de morir, y que es poco conocida: "la aparente suprema existencia independiente del Estado es en sí misma sólo una apariencia y... es en todas sus formas una excrecencia de la sociedad; así como su aparición misma surge solamente en una cierta etapa del desarrollo social, desaparece de nuevo tan pronto la sociedad llega a una etapa aún no alcanzada".¹

Es interesante proponer aquí un proyecto alternativo de misterio: ¿qué condiciones provocarán la desaparición del llamado "sistema político mexicano"? ¿Qué tipo de crisis terminará con el ceremonial burocrático de las sucesiones presidenciales? Estas preguntas cancelan el postulado de un Estado enfermizamente autónomo, *Deux ex machina* de la dinámica social; estos interrogantes nos enfrentan bruscamente a lo que en el fondo casi todos sabemos: que carece de importancia *histórica* la personalidad sexenal del elegido por el PRI para gobernar al país, que el misterio de la sucesión presidencial no es más que el vapor adormecedor de una ideología política destinada a ocultar el hecho histórico *fundamental*: la burguesía tiene el poder en México, para decirlo de una manera escueta que es como a veces hace falta decir las cosas en países donde las vestiduras imaginarias se acumulan farragosamente sobre el cuerpo del rey desnudo. Por cierto que en nuestra historia los campesinos ocupan el lugar del niño que en el cuento descubre la desnudez del rey; la diferencia consiste en que aquí los campesinos pagan con la vida su descubrimiento. Pero antes de seguir con nuestra historia, demos un vistazo rápido a lo que ocultan las vestiduras del rey.

La triple dominación invisible de la oligarquía, los nuevos ricos y la tecnocracia

Primera. Nadie habrá dejado de reconocer la presencia en México de una tendencia política represiva, autoritaria y despótica; muchos, además, la han sufrido en carne propia. ¿Su existencia es debida sólo al mal humor que se despierta en algunos políticos ante la insurgencia de brotes de oposición? ¿O a la presencia de grupos de presión con ansias fascistas? Por el contrario, es posible ubicar las raíces de esta tendencia —por cierto la más poderosa pero no totalmente hegemónica— en una fracción de la burguesía que goza de la doble peculiaridad de tener una vieja tradición y de formar parte estructural de la oligarquía financiera. Se trata de una burguesía que nació en el siglo pasado, que tiene su propia historia, su pecado original porfirista y que ha, por lo tanto, conocido diferentes formas de Estado. Es entre otras por esta razón que no se identifica plena-

mente con el Estado “revolucionario” forjado por Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas y que mantiene cierta autonomía frente al gobierno. Justamente es esta relativa independencia la que le permite ejercer un peso decisivo en el aparato político sin que haya logrado, no obstante, una completa hegemonía política. Esta fracción burguesa ha cristalizado en una facción política bastante bien identificada que opera en forma unitaria: las burguesías regionales de Monterrey, Guadalajara, Puebla y Saltillo son su expresión más evidente y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) su instrumento político (no económico) más afilado. Se trata de una fracción burguesa que se ha orientado preferentemente al impulso de grandes empresas de fabricación de bienes intermedios y de capital en estrecha asociación con el capital extranjero; incluye a la gran burguesía comercial, a parte de la burguesía agraria y a los grandes ganaderos. De aquí que no vea con buenos ojos la “excesiva” intervención estatal en la economía, que se oponga a una política fiscal que agilice los mecanismos monopólicos estatales y grave a las capas de altos ingresos. La “solución” para esta fracción se encamina a canalizar la acción del Estado hacia el incremento de las exportaciones (de materias primas, de productos maquilados, de manufacturas de las grandes empresas transnacionales que tienen un mercado asegurado). El Estado debe, además, a los ojos de esta burguesía, encargarse de las grandes obras de infraestructura (presas, comunicaciones) para abrirle paso al capital privado. Desde el punto de vista de un político moderno y refinado, esta posición aparece como el apetito bárbaro de la burguesía por acumular capital por las vías más rápidas; aparece como el interés brutal y descarnado por la ganancia, que quiere para sí los dividendos y deja al Estado las tareas sucias, desprovisto de una cierta sensibilidad moderna que pueda contener y encauzar de manera global y con los menos conflictos posibles el desarrollo del capitalismo en México. La vocación de hegemonía que sin duda tiene esta fracción burguesa encarna de manera tosca en la imagen del burgués ultrarreaccionario y antidemocrático. Sus esfuerzos hacia el logro de la hegemonía son cada día más patentes y amenazadores: ha logrado crear su propio sistema sindical (la Federación de Sindicatos Independientes) que en Monterrey —por ejemplo— agrupa a más del 70% del proletariado industrial; tiene casi totalmente en sus manos uno de los medios de difusión más importantes, la televisión, y varios periódicos de gran tiraje; no hace mucho tiempo intentó comprar una cadena de más de 30 periódicos (los “Soles” de Valseca), lo cual fue frustrado por el Estado (que adquirió la cadena); su hábil trabajo de infiltración y control en la Secretaría de Hacienda, que es uno de sus canales de presión más importantes, se encuentra muy avanzado (es sabido que mediante el obsequio de paquetes de acciones a altos funcionarios logran algo más que simplemente comprarlos: aburguesan a la burocracia). Su cercanía a dos sectores extraordinariamente sensibles de la economía mexicana —la exportación y el turismo— les coloca en una posición favo-

able para influir de manera fuerte y a veces determinante en el curso de la política económica del Estado; recientemente esta fracción dio un paso importante en el terreno político: la creación del Consejo Coordinador Empresarial bajo la presidencia de un sagaz teórico y político de la burguesía: el cervecero Sánchez Navarro.

Las fracciones políticas de una clase no coinciden siempre con los estratos económicos en que se divide; es el caso de esta fracción burguesa a que se hace referencia. Esta es probablemente la causa del carácter tosco, brutal e inacabado de las posiciones políticas que postula esta fracción, que no plantean un proyecto o modelo refinado de los intereses *generales* de toda la burguesía. En efecto, esta es una fracción de la *oligarquía monopólica*, pero en ella está ausente un grupo económico clave cuya presencia aquí redondearía los perfiles de un estrato económico completo y permitiría a la oligarquía financiera en su conjunto presentarse con más unidad política. El grupo económico ausente al que se hace referencia es el de los grandes banqueros, que manejan el verdadero sistema nervioso de la economía monopólica y que desde hace años sostienen una posición muy cercana al Estado, mantienen vínculos muy estrechos con el poder ejecutivo y con el sector público de la economía. Este peculiar desprendimiento y la singular ubicación de los grandes banqueros (a la cabeza de los cuales figura el grupo Banamex de Legorreta) significan una barrera de contención a la hegemonía de la oligarquía monopólica; pero, al mismo tiempo, los grandes banqueros se han convertido en los representantes y mejores abogados de la malhumorada burguesía nortea al interior del bloque hegemónico.

Segunda. ¿Por qué no ha de sentirse profundamente “revolucionaria” la parte de la burguesía que ha ido surgiendo gracias al apoyo del Estado “revolucionario”? En la existencia ya sólidamente establecida de esta fracción de la burguesía encuentra una base segura y una cierta protección la corriente política que se permite algunas veleidades populistas, que se cree enormemente nacionalista, que se ha ligado con frecuencia a los mecanismos mediadores del aparato político y que apoya diversas formas de intervencionismo estatal en la economía. En la cristalización de esta fracción política también se entrecruzan los elementos históricos y las peculiaridades económicas. Este es un grupo de “nuevos ricos” que creció a la sombra del proteccionismo estatal, de la política de sustitución de importaciones, de las extensiones de impuestos acordadas por el gobierno, y de los subsidios indirectos que reciben (v.gr. tarifas especiales de consumo de electricidad). A pesar de que ésta es la fracción burguesa más ligada al poder central, es la menos independiente y la que presenta un perfil político más borroso: se deja representar cómodamente por la burocracia política, la cual al mismo tiempo contribuye permanentemente a engrosar las filas de esta fracción al propiciar las formas de acumulación de capital entre los altos funcionarios. Si bien esta fracción política no es dominante por sí misma, una parte de la burocracia política ejerce la hegemono-

nia en su nombre y en su beneficio. Esta nueva burguesía también tiene un asiento geográfico propio: el Distrito Federal y el Estado de México (zona industrial de la ciudad de México y su periferia).

Desde el punto de vista del Estado y de su burocracia política, esta fracción de la burguesía ha resultado ser la más "manipulable" y la que se adapta con mayor facilidad a los modelos de desarrollo económico propuestos por el Estado. Sin embargo, en últimas fechas esta fracción ha propiciado diversas corrientes, desde neocardenistas hasta demócrata-cristianas, que se resisten a las formas despóticas y represivas y buscan nuevas alternativas de "apertura" a la situación política. Así pues, esta fracción política presenta una posición política menos unificada y menos coherente que su hermana la burguesía nortea, pero paradójicamente junto con los banqueros, está más cerca del poder de decisión. Sus posiciones "neocardenistas" se manifiestan especialmente en materia agraria, donde impulsan reformas que buscan eliminar los obstáculos que la concentración de la propiedad privada de la tierra presenta a la concentración y circulación del capital; medidas tales como los ejidos colectivos (y eficientes), la Ley de Aguas que limita la posesión de tierra a 20 Has, etcétera, son medidas que son bien vistas, o al menos no entorpecidas, por esta fracción.

Al interior de este grupo han surgido algunos débiles brotes políticos que demandan una cierta democratización del sistema. Es el caso de los empresarios que insinúan tímidamente sus deseos de que en México funcione un sistema menos represivo y más parlamentario.

Hoy en día esta fracción alberga ya a una porción importante de la gran burguesía que se orienta hacia la producción de bienes de consumo directo (como efecto del proceso de sustitución de importaciones de este tipo de bienes), pero también contiene a capas de empresarios medios que buscan insistentemente toda clase de medidas protectoras del Estado para acrecentar su riqueza. Durante muchos años la CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación) logró canalizar los intereses de esta fracción de la burguesía protegida y revolucionaria; sin embargo, la CANACINTRA nunca logró ser plenamente un órgano de expresión de sus intereses y siempre fue más una forma de control gubernamental.

Tercera. La enorme y abigarrada burocracia política que controla directamente el aparato estatal contiene en su seno una gran diversidad de grupos y facciones políticas. Pero a medida que ha ido fortaleciéndose el capitalismo monopólico de Estado, se ha desarrollado una tecnocracia moderna que representa y constituye una fracción aún más nueva de la burguesía: la ligada al capitalismo de Estado. Estos intereses se encuentran aún muy sumergidos en y teñidos por las viejas formas de atraso paternalista que han caracterizado en buena medida a la política económica del Estado. No obstante, hoy en día el conjunto de intereses ligados a las grandes obras de infraestructura, al petróleo, la electricidad, el acero, a la

construcción urbana, a la producción ejidal, a la comercialización y financiamiento estatales, etcétera, constituyen un conglomerado de actividades económicas con un marcado carácter propio. Planificación, organización y eficiencia son los conceptos que orientan a la alta tecnocracia estatal en su lucha por controlar los mecanismos claves del desarrollo económico.

La hegemonía política al interior del Estado mexicano, hoy en día, se encuentra en manos de una triple alianza entre esta tecnocracia de Estado, los grandes banqueros y la nueva burguesía "revolucionaria". Este bloque de poder, que está rodeado y protegido por infinidad de grupos y facciones de muy diversa índole, representa al conjunto de los intereses de la burguesía; este bloque no gozaría de una relativa estabilidad si no se hubiese logrado un acuerdo político con la fracción con vocación más oligárquica de la burguesía, en virtud del cual el bloque hegemónico mantiene directamente las riendas del poder pero le permite una constante e importante ingerencia en los procesos de toma de decisiones.

La descomposición del campesinado y la crisis política

Durante el sexenio administrado por Luis Echeverría la triple alianza se ha tornado visible en forma de la incierta y desconcertante "apertura democrática"; con este término se ha querido señalar la manera en que los gobernantes han decidido abrir las ventanas para que el pueblo pueda admirar desde lejos el espectáculo de una democracia prometida pero no ejercida, y para que entren aires perfumados que hagan olvidar, entre otras cosas, la masacre de Tlatelolco en 1968. Pero las mieles de la "apertura democrática" sólo han venido a demostrar que el país se está adentrando en una profunda crisis política.

En realidad, la política de apertura ha tenido por base un pequeño reacomodo del bloque dominante: un mayor acercamiento entre algunos de los intereses de la que he denominado nueva burguesía y el modelo político de la tecnocracia estatal, en aras de un intento algo maltrecho y frustrado por controlar las ambiciones de la oligarquía; el objetivo político más importante de este intento fue justamente el de frenar la paulatina destrucción de los tradicionales mecanismos mediadores que permitieron durante mucho tiempo una gran estabilidad al país. Esta degeneración de la legitimidad del Estado es a la vez causa y efecto de las fisuras y grietas que han aparecido en el bloque hegemónico; la erosión de las estructuras de mediación y legitimación del poder burgués no sólo significa la caducidad de ciertas instituciones (CNC, CTM, Secretaría de la Reforma Agraria, etcétera), sino que —por lo que se refiere a la agricultura— implica el dramático proceso de liquidación de una clase social que hasta hace pocos lustros era la más numerosa y la depositaria de los mitos más caros de la Revolución mexicana: el campesinado.

El campesinado mexicano, tal como lo conocemos hoy en día, es en

cierta manera una invención de la burguesía, que lo engendró a su imagen y semejanza. La fracción burguesa que consolidó su poder a raíz de la Revolución mexicana, después de ahogar en sangre al campesinado revolucionario, inició un proceso de reformas indispensables para abrir libre cauce a las relaciones de producción capitalista. De esa forma, fruto del miedo, de la astucia y de los sueños pequeñoburgueses socializantes de las clases dominantes —pero también fruto de la lucha popular— nació el campesinado mexicano. En diferentes jalones de la historia, el campesino mexicano fue adquiriendo su carácter actual; Obregón y Calles lo imaginaron como un *farmer* norteamericano; Cárdenas lo consolidó como minifundista atrapado en el mercado capitalista, con algunos toques colectivistas pero uncido al aparato estatal; muchos años después el “agrarismo” de López Mateos generalizó la imagen de un semiproletariado dotado de un trozo de tierra árida o montañosa. Cada gobierno puso su peculiar contribución al proceso de modelar al campesino mexicano. Así pues, resultado de intrigas y alianzas que en su momento expresaron la correlación de fuerzas políticas, sin que jamás los campesinos tuvieran efectiva intervención, fue surgiendo a retazos la masa heterogénea que denominamos ejidatarios, minifundistas, comuneros, etcétera. Los campesinos mexicanos no son la reminiscencia de un oscuro pasado, sino el subproducto del crecimiento del capitalismo moderno (aunque subdesarrollado, valga la paradoja).

El campesinado mexicano fue ubicado por la lógica capitalista como el polo de atracción intermedio entre las dos clases antagónicas fundamentales: el proletariado y la burguesía. Su papel había de ser tanto político como económico: factor de equilibrio en los conflictos de clases y elemento de fijación de una fuerza de trabajo que la economía del país no podía emplear en la industria o en los servicios. He aquí la paradoja de nuestro subdesarrollo: el capital ha requerido en México, para crecer, de un tipo histórico de producción —la pequeña economía parcelaria campesina— que está llamada a desaparecer en la sociedad moderna. Como toda paradoja, se trata de una contradicción de la realidad misma; la contradicción consiste en que las relaciones de producción capitalistas requieren y al mismo tiempo destruyen al campesinado parcelario. Pero esta contradicción se expresa de forma diferente en cada coyuntura política; por ejemplo, durante la época de Cárdenas prevaleció la necesidad de crear una economía campesina, aun a costa de sacrificar algunos intereses de la burguesía rural.

Hoy en día la situación es diferente, y esta contradicción se encuentra matizada por la presencia de elementos nuevos: la avanzada descomposición y proletarización del campesinado, y la presencia importante y decisiva del capital monopólico (privado y estatal) en la agricultura. Estas nuevas condiciones (aunadas a la crisis agrícola) han señalado la necesidad de reorganizar al sector reformado (ejidal) de la agricultura. Las posibilidades de reorganización oscilan entre dos alternativas extremas:

- a) Permitir la libre circulación y concentración de capital en el sector ejidal; es decir, el fomento abierto de una burguesía agraria en tierras ejidales y la consiguiente expulsión y pauperización de miles de ejidatarios (vía del monopolismo privado).
- b) Dirigir la concentración de capital en forma controlada y financiada por el Estado, bajo la forma de ejidos colectivos, cooperativas y empresas estatales descentralizadas (vía del monopolismo estatal).

Los indicios permiten suponer que durante los últimos cuatro o cinco años ha habido varias escaramuzas entre las diferentes fracciones de la clase dominante para hacer prevalecer una u otra alternativa. Por un lado la nueva Ley de Reforma Agraria permite embozadamente el arrendamiento de tierras ejidales, y no se observa ningún esfuerzo oficial serio por restringir el proceso de concentración de tierra que la renta de parcelas ejidales implica; pero por otro lado la administración actual ha puesto cierto empeño en la organización de ejidos colectivos y cooperativas, empeño que si bien ha ido un poco más allá de la tradicional demagogia, no ha logrado cimentar un sector importante y eficiente de agricultura colectiva. La nueva Ley de Aguas, que legalmente podría impedir la concentración de tierra en los nuevos distritos de riego, tampoco ha sido utilizada por el gobierno. Diríase que se ha creado un equilibrio crítico entre ambas alternativas extremas; es evidente que la disyuntiva no se resolverá durante el sexenio de Luis Echeverría y el futuro presidente ha sido seriamente advertido por una virulenta huelga agrícola patronal en Sinaloa y Sonora, ocurrida recientemente, de que la burguesía rural no está dispuesta a retroceder. El resultado concreto de este paro patronal ha sido muy significativo: el gobierno se ha visto obligado a dar cabida y representación a los empresarios agrícolas en una comisión tripartita del más alto nivel que decidirá sobre asuntos agrarios de la mayor importancia; es muy significativa, por cierto, la ausencia en esta comisión tripartita de representantes de los obreros agrícolas.

Cualquiera que sea la forma que adopte el proceso de concentración y acumulación de capital en la agricultura, no cabe duda que se acerca a su fin la época en que la economía campesina parcelaria pueda tener un papel clave en el equilibrio político y económico de la estructura agraria mexicana. Para las clases dominantes el problema consiste en deshacerse del campesinado parcelario sin provocar un caos político y al mismo tiempo encontrar un camino de desarrollo capitalista alternativo. Para las clases explotadas el problema consiste en dirigir el proceso de disolución del campesinado, no hacia un intento por recobrar su estatuto primitivo, sino hacia la consolidación de formas de lucha proletarias enfiladas a combatir las formas capitalistas más modernas de explotación. El proceso será largo y difícil, pues de un lado y otro de la línea de fuego aún quedan rastros del romanticismo populista que no quiere ver desaparecer al viejo campesinado.

¿Qué carácter tiene la crisis que vive la agricultura mexicana? De acuerdo con algunos esperanzados teóricos populistas, se trata de una crisis estructural de la vía capitalista o neolatifundista que abre paso a la revitalización de la pequeña economía campesina. En realidad, la confluencia de dos tipos diferentes de crisis ha confundido mucho el panorama; por un lado, la gran crisis mundial que se inicia abiertamente en 1974 (de la cual la crisis agrícola mundial previa era ya un signo anunciador) se hace sentir en México especialmente en la enorme contracción de las exportaciones de productos agrícolas y de la producción de insumos industriales, y —desde luego— afecta principalmente a las empresas agrícolas capitalistas. Pero por otro lado avanza inexorablemente (desde principios de los años 60) la crisis de la economía campesina, cuyos altos costos resisten cada vez menos los precios de mercado imperantes. La simultaneidad de ambas crisis durante los años 1974-75 ha sido verdaderamente catastrófica para la agricultura mexicana. La inflación ha tenido un efecto terriblemente desorganizador para la pequeña economía campesina: por una parte, este tipo de economía no responde automática y positivamente (aumentando la producción) a las alzas de los precios de los productos agrícolas; por otro lado, el alza en el costo de la vida ocasiona simultáneamente y contradictoriamente un impulso por elevar la producción y por buscar más fuentes de trabajo asalariado fuera de la unidad agrícola familiar.

Hay que advertir que ambas crisis no sólo han sido devastadoras para el pequeño campesino, sino que también han afectado profundamente al sector más atrasado e ineficiente de la burguesía rural, que se sostiene gracias a la renta de la tierra y a la superexplotación de la mano de obra; este sector tiene los vicios económicos combinados del campesino (ineficiencia) y del burgués (rapiña), pero no reúne las cualidades de esfuerzo en el trabajo del primero ni de eficiencia del segundo. De esta manera, la agricultura mexicana está atravesando por una etapa de depuración; a pesar de que en términos generales la burguesía agraria ha tenido dificultades —que ha transferido en buena parte al campesino y al obrero agrícola— durante el próximo período de recuperación de la crisis cíclica el sector moderno de la clase dominante en el campo se encontrará fortalecido y con el camino más despejado. Más despejado y depurado desde el punto de vista *económico*, pues la alternativa monopólica aparecerá con más pureza, pero no será lo mismo desde el punto de vista *político*. Desde el punto de vista económico la crisis es el entrecruzamiento de una crisis de sobreproducción (encadenada a la situación mundial) y una crisis de la economía ineficiente tradicional; la solución más sencilla parecería ser la salida monopólica (bajo la dirección privada y estatal). Pero esta solución está erizada de problemas políticos, pues implica forzosamente la liquidación de gran parte del campesinado parcelario. Y sin embargo, no parece haber otra alternativa, a menos que se piense en el cambio global del sistema.

Quiero adelantarme a una posible crítica a lo dicho aquí, pues con anterioridad no han faltado teóricos del PRI que han pretendido interpretar nuestras tesis de una manera particularmente chusca: imaginan que la interpretación marxista propone que se promueva la organización capitalista de la agricultura con el fin de que la proletarización traiga consigo un nuevo modo de producción, el socialista (y nos acusan de coincidir con la burguesía en este interés por promover el capitalismo). Hasta el marxista más dogmático y esquemático contemplaría con repugnancia una tesis de esta naturaleza. Para empezar, los marxistas no “proponen” formas de desarrollo capitalista y, por otra parte, en México nadie los ha llamado a proponer nada al respecto (no hay que confundir con los marxistas a algunos intelectuales del IEPES del PRI que se hacen la ilusión de que alguien va a hacer caso a lo que proponen). Los marxistas, a partir de una praxis, simplemente constatan y analizan el proceso de acumulación capitalista, y cuando proponen algo lo hacen con una fuerza social y política que busca *derrumbar* al régimen capitalista. Todo marxista sabe que no hay recetas para ubicar el momento revolucionario; nuestros críticos pretenden poner en nuestros labios la idea absurda según la cual conforme haya más capitalismo, habrá más contradicciones sociales y, por lo tanto, más posibilidades revolucionarias; a nuestros críticos les horroriza la violencia del proceso de ruina del campesinado y, en un arranque de romanticismo, no saben “proponer” otra cosa que medidas de protección, que a fin de cuentas protegen más al explotador que al explotado. Los marxistas, en cambio, se dan cuenta del renacimiento del campesino en la figura del obrero, se inscriben en ese proceso y procuran examinar sus consecuencias políticas con el fin de enriquecer la práctica revolucionaria.

Los seis años de “apertura” han demostrado la incapacidad de una alternativa populista autónoma de corte neocardenista, que a nombre de la burguesía “revolucionaria” en alianza con la tecnocracia pueda implementar un modelo que favorezca el desarrollo del capitalismo en el campo y que *al mismo tiempo* impida la proletarización y pauperización del campesinado. Por el contrario, la aplicación del modelo echeverrista ha demostrado que:

- a) La colectivización del ejido llega rápidamente a una encrucijada: o bien se crea un sistema corrupto y paternalista (como los ejidos henequeneros de Yucatán) o bien se generan empresas eficientes que aceleran la proletarización del campesino y la migración hacia las ciudades (Sinaloa).
- b) Las empresas capitalistas con participación ejidal, sean cooperativas o no, crean una polarización y un enfrentamiento entre una minoría de campesinos en proceso de “kulakización” y una mayoría de jornaleros agrícolas.
- c) Amplios sectores de la burguesía agraria se oponen violentamente a la colectivización del ejido y no han permitido ser desplazados

de los distritos de riego en donde arriendan tierras ejidales en gran escala.

- d) El proyecto de nuevas reformas en el campo no ha servido para reconstruir la maltrecha estructura de mediación y legitimación (CNC/PRI/Secretaría de Reforma Agraria, etcétera). Por el contrario, la lucha campesina independiente y casi siempre espontánea se agudizó (invasiones de tierras, guerrillas), se hicieron importantes concesiones a la burguesía (la comisión tripartita), la burocracia "agrarista" perdió poder de presión dentro del Estado y tuvo que recurrir a la absorción de grupos populistas corruptos (CAM de Serrano, CCI de Garzón, UGOCM) para recuperar un poco la imagen perdida (Pacto de Ocampo).

Vale la pena destacar algunos aspectos de los dos últimos puntos enumerados. En primer lugar, el descontento de la burguesía agraria (expresado tanto en el paro patronal como en el asesinato de campesinos) forma parte de la inconformidad de la fracción oligárquica de la burguesía; aunque toleró a regañadientes el aperturismo de Echeverría (estaba demasiado ocupada en salvaguardar sus intereses económicos de los efectos de la crisis), durante el proceso de sucesión presidencial en 1975-76 cobró caras al gobierno sus veleidades democráticas: aceleró directamente una crisis interna del único partido de oposición oficializada verdaderamente importante (de derecha); de esta manera el PAN no logró elegir candidato a la presidencia y al candidato del PRI-gobierno no le quedó más remedio que hacer una ridícula campaña electoral sin opositores legales. Esta situación tan anómala para un Estado que se pretende democrático significa *un serio golpe a las tendencias que apuntaban la relativa independencia de la tecnocracia y burocracia políticas*. En efecto, el futuro presidente y su equipo —por llegar al poder en circunstancias tan desfavorables e ilegítimas— encontrará estrechadas las proverbialmente muy amplias posibilidades de maniobra del poder ejecutivo.

En segundo lugar, la alta burocracia política ha perdido también independencia debido al hecho de que ya no se encuentra cómodamente instalada en la cúspide de una pirámide de mediaciones que tiene por base al caciquismo. La modernización del capitalismo agrario y la ruina de la típica base social del caciquismo —las comunidades campesinas— han provocado la necesidad de sustituir a los caciques, los cuales —por lo demás— en su mayor parte ya no ejercen adecuadamente sus tradicionales funciones mediadoras y han degenerado en déspotas locales y regionales. Pero la administración formal —municipal y estatal— no siempre se encuentra en condiciones de tomar el relevo y asegurar sin desequilibrios el *statu quo*. De esta manera, la facción política que quijotesca-mente combatió contra los entuertos de los caciques, durante la lucha perdió a su Sancho Panza; es decir, perdió a buena parte del campesinado que le servía de escudero y de colchón amortiguador; de esta manera sentó las bases agrarias de una crisis política.

En resumen, y para los fines de la argumentación que esbozamos en este ensayo, podemos ubicar tres series de factores que pueden modificar a corto plazo las peculiaridades del proceso político en México:

1) Los cambios en la composición social de las masas rurales como resultado de la polarización y descampesinización inherentes a la extensión y concentración del capital en la agricultura.

2) El surgimiento de un nuevo orden de conflictos sociales y políticos en el campo, en los que se comienzan a perfilar como protagonistas principales a una enorme masa de jornaleros y a un creciente proletariado agrícola. Estos problemas, aunados a la crisis económica y a las tensiones que generan las migraciones hacia las ciudades, han contribuido a enervar a importantes sectores de las clases poderosas y a incrementar su desconfianza en los mecanismos políticos gubernamentales usados para superar los conflictos (ejidos colectivos, ley de aguas, cooperativas, nueva ley de reforma agraria, unificación y centralización del crédito rural, formas de combate contra la violencia rural, bloqueo a la organización sindical, "pacto" de Ocampo, denuncias contra el caciquismo, demagogia sobre la nacionalización de los distritos de riego, etcétera).

3) La desaparición paulatina del campesinado como base social del PRI-Gobierno, la crisis de las estructuras de mediación (caciquismo, etcétera), el fracaso o el carácter limitado de las reformas a la estructura agraria y las fuertes presiones de la burguesía agraria han minado la relativa autonomía de la burocracia política, misma que fue alcanzada gracias a la política agraria de los gobiernos de la Revolución mexicana.

En México el proceso de descampesinización afecta al conjunto de la sociedad: la llamada explosión demográfica, el desperdicio de fuerza de trabajo, el crecimiento de los llamados sectores marginales, la violencia contra la propiedad privada de la tierra, el bracerismo, la desbocada migración a las ciudades, la desocupación, los bajos salarios, etcétera, etcétera, son fenómenos que se encuentran estrechamente ligados a la desaparición tendencial del campesinado. El sistema político mexicano no se encuentra bien preparado para resistir el alud de conflictos y problemas que van apareciendo en cadena durante el proceso de acumulación de capital en el campo.

La crisis política apunta porque aparecen fisuras y serias discrepancias entre las fracciones del bloque hegemónico. La oligarquía desconfía de la tecnocracia en la medida en que ésta pierde autonomía y legitimidad, y se muestra poco apta para absorber, organizar y mediatizar a las masas proletarizadas del campo. La nueva burguesía, que de nueva cada día tiene menos, se dispersa en un amplio abanico de facciones políticas, pierde cierta coherencia que le daba la seguridad de ser mimada y protegida por el Estado y pierde también confianza en los proyectos reformistas que tímidamente había apoyado; el resultado es que su alianza con la tecnocracia estatal se encuentra debilitada en la misma medida en que

se ha ido borrando su ya tradicionalmente escasa unidad política y económica. En consecuencia, el fracaso del populismo tecnocrático auspiciado por un cierto acercamiento entre tecnócratas y nueva burguesía —que fue uno de los signos con que se inició el sexenio de Echeverría— ha hecho cundir la desmoralización o la desorientación en las filas de la burocracia y ha encendido muchos rencores en la pequeña y mediana burguesía urbana.

No se pretende aquí afirmar que la causa fundamental de la crisis política radica en el desmoronamiento de la pequeña economía campesina y la consiguiente proletarización de las masas rurales; simplemente se intenta subrayar la gran influencia que ejercen estos factores en el cambio de las reglas del juego político. Para enfatizar la importancia de los factores rurales de la crisis, es interesante citar dos aspectos más del problema. En primer lugar basta constatar el hecho de que el eje de la dinámica sociopolítica ha pasado del campo a la ciudad; sin embargo, los gobernantes aún no se han acostumbrado y adaptado totalmente a la idea de que ya no es tan fácil acudir, pongamos por caso, al voto rural para demostrar la legitimidad del sistema frente a la abierta o velada oposición creciente de importantes sectores de obreros o capas medias de las ciudades.

En segundo lugar, y esto es muy importante, es posible advertir la enorme influencia que los recientes conflictos agrarios han provocado en la conformación del ejército. Desde hace 15 años, período en que se ha intensificado considerablemente la lucha campesina (Jaramillo, guerrillas en Guerrero y otras regiones, organización de la CCI, invasiones de tierras, paros en zonas azucareras, etcétera) el ejército ha cumplido una función represiva esencial para mantener el *statu quo* en el campo; a raíz de ello, especialmene en los años 60 el ejército se modernizó técnica y logísticamente, preparó cuerpos de élite para la llamada “contrainsurgencia” o “guerra irregular” para controlar “disturbios civiles”, y adquirió grandes cantidades de armamento moderno a Bélgica, Israel y Estados Unidos para sustituir sus armas anticuadas (sintomáticamente, las grandes compras de armamento y pertrechos ocurren en 1961 y 1968). La administración de Echeverría hereda ya a un ejército relativamente moderno que —conocedor de su importancia política, adquirida en sus enfrentamientos con las luchas populares— presiona al gobierno con el fin de encontrar una ubicación de mayor prestigio e importancia dentro del Estado. Los resultados han sido obvios: mejoría notable en las condiciones de vida de oficiales y soldados, renovación de mandos y —sobre todo— un salto importante en la organización y el nivel de la educación militar (desde 1972 se lleva a cabo el Plan de Reforma Educativa Militar que, entre otras cosas, desemboca en la creación de una importante universidad militar). En el aspecto técnico, ha habido una renovación total de la fuerza aérea, que hasta 1974 era prácticamente nula (ese año se compran cerca de 50 aviones y 20 helicópteros, cifra sin precedentes).

Los importantes servicios políticos prestados a la clase dominante por el ejército, sobre todo en las zonas rurales, no sólo lo han modernizado y politizado, sino que han provocado el surgimiento de nuevas tensiones dentro del instituto armado, que se revelan en ciertas resistencias de un sector más culto de la oficialidad en realizar tareas sanguinarias y represivas, y en una gran polarización entre los cuerpos de élite —bien armados y bien pagados— y en un sector numeroso de soldados que vive pobremente en zonas inhóspitas, condenados a una existencia nomádica. Pero al mismo tiempo, detrás de los llamados programas de “acción cívica”, de obvia inspiración norteamericana, se descubre el intento de un sector proimperialista de la oficialidad por ocultar, tras la caricatura del militar bueno que siembra arbolitos, reparte alimentos y restaura escuelas, al verdugo de campesinos descontentos.

Nuestro sistema político ha sido en cierto sentido una mesa de tres patas; estaba apuntalado por una base triclassista: la burguesía llamada oficialmente clase media, los obreros y los campesinos. La clave de la continuidad “institucional” y “revolucionaria” de un Estado ubicado —aparentemente— por encima de la lucha de clases radicaba en alto grado, aun cuando no exclusivamente, en la base campesina del régimen, hoy en día endeble y tambaleante. Cada vez más claramente la mesa va quedando sostenida por dos patas, y aún así cojea visiblemente, pues la clase obrera ha iniciado su movimiento hacia la independencia sindical y en la burguesía aparecen fisuras peligrosas. Ciertamente es que una bota militar podría, transitoriamente, compensar los desequilibrios; pero se arruinaría para siempre el mito del Estado de la Revolución mexicana y con él la burocracia que le ha servido. Una alternativa democrática también podría lograr un cierto restablecimiento del equilibrio y, sobre todo, abriría el camino a nuevas opciones. Sin embargo, aun cuando estas dos vías están a la vista, lo más probable es que el gobierno mexicano insista tercamente en vivir de las mediaciones perdidas o cada día más ilusorias de un poder institucional que busca la solución en todos pero que entrega el timón a unos pocos. Será también una vía hacia su ruina, más lenta y menos dolorosa que un golpe militar, menos costosa para algunos sectores de la burguesía que la salida democrática, pero en cambio más dramática por cuanto puede arrastrar a la sociedad hacia esos peligrosos estados de enervamiento que son buenos caldos de cultivo para el fascismo. De cualquier forma, el Estado mexicano ha de resentir seriamente el proceso de extinción del campesinado: una extinción imposible en marcha permanente.

¹ “Marx Excerpts from Henry Summer Maine, *Lectures on the Early History of Institutions*”, en *The Ethnological Notebooks of Karl Marx*, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, 1974, p. 329.